



Rafael Martínez Berna y Manuel Peláez Robles acompañan a la consellera Isabel Bonig y sus dos secretarios autonómicos antes de la reunión con todo el sector. :: A. DOMÍNGUEZ

## El sector de obra pública alerta de despidos masivos si el Consell no paga las deudas

**La consellera Bonig se limita a echar la culpa al Gobierno central «al recortarnos 2.850 millones de euros desde el año 2005»**

**:: BERNAT SIRVENT**

**ALICANTE.** El sector de la obra pública de Alicante, con medio centenar de pymes y empresas de tamaño mediano y grande, tanto alicantinas como de implantación nacional, entre ellas Ecisa, grupo Cívica de Ortiz o ACS del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, alertó ayer velada y directamente a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, de la probabilidad real que hay de que se produzcan despidos masivos de plantillas temporales e incluso fijas si no se agilizan los pagos de la Generalitat Valenciana, unas deudas pendientes en muchos casos con las obras ya plenamente ejecutadas.

La advertencia se produjo en un encuentro celebrado ayer en un ho-

tel alicantino. Antes de la reunión a puerta cerrada, en la que intervinieron una docena de los más importantes empresarios de obra pública, el presidente de la Federación Alicantina de Obra Pública (Fopa), Manuel Peláez Robles, ya dejó entrever cuál es el riesgo real de las compañías. «La construcción no es más que un sector que empleo a muchísimas personas y tenemos que adaptar todas las empresas a la nueva realidad, aunque sabemos que la Conselleria es plenamente consciente», advirtió el consejero delegado de Ecisa.

El argumentario se dejó entrever y se oyó directamente después en el interior de la sala Mediterráneo del Hotel Meliá de Alicante. Los empresarios expresaron sus dudas a la consellera Bonig sobre la continuidad de sus plantillas en el actual estado de asfixia financiera y de incertidumbre sobre los proyectos públicos de futuro.

De hecho, varias de las preguntas incidieron en la repercusión que puede tener en el empleo la morosidad de la Generalitat Valen-

ciana. El presidente de Fopa, pese a las preguntas de los periodistas, no pudo precisar cuál es la deuda actual del Gobierno valenciano. «Claro que nos deben dinero, como yo y otros muchos compañeros le debemos a nuestros proveedores», exclamó de modo ilustrativo Manuel Peláez Robles.

Fopa no ve un grave problema los impagos por el Plan Confianza. «Nos ha dado un gran servicio a todo el sector de obra pública», añade. Al ser preguntado por el plan de agilización de pagos que pregonó el exconseller de Economía Gerardo Camps en los meses anteriores tras varias reuniones con Fopa, el presidente de Fopa admitió que iba a centrar las principales preguntas

**«La construcción no es más que un sector que emplea a muchas personas», dice Peláez**

de los empresarios del sector. Pese a haberse reunido con el conseller de Economía, Enrique Verdaguer, el pasado lunes en Coepa, considera que no era el marco adecuado al estar presentes todos los sectores económicos alicantinos. Pero es consciente de que «ese plan se basaba en los programas de ingresos y como todos estos han ido a la baja, nos tocará reclamar a la Administración autonómica que nos tenga en cuenta», dijo Peláez Robles.

Antes de la cita y también durante la reunión a puerta cerrada, la consellera Bonig se limitó a echar la culpa en su totalidad al Gobierno de España «porque todas sus medidas anticrisis han sido tardías y baldías». Además, dijo que es prioridad del presidente del Consell, Alberto Fabra, los pagos a proveedores y acreedores. Pero advirtió de que el problema de fondo son los 2.850 millones de euros, a razón de 400 anuales desde el 2005, que el «Gobierno socialista y sectario» de España ha dejado de ingresar en las arcas autonómicas, según la consellera Bonig.

**Dan por hecho que no se cobrarán trabajos ya ejecutados**

**:: B. S.**

**ALICANTE.** En reuniones privadas durante los últimos días con Fecoval, Cámara de Contratistas y Fopa, ayer mismo, ya que cada organización tiene sus «distintas problemáticas», según Manuel Peláez Robles, los consellers de Hacienda, José Manuel Vela, y de Economía, Enrique Verdaguer, han comunicado y admitido abiertamente que las tensiones de liquidez y la inestabilidad de los mercados de deuda harán imposible el pago de determinadas obras, incluso ya las que están ejecutadas. Así, es imposible un calendario de pagos por obras hechas o pendientes, como pide el sector.

**«En el proyecto para agrupar las empresas públicas sí tenemos dudas»**

**:: B. S.**

**ALICANTE.** El presidente de Fopa explicó, al ser preguntado, que el problema no es el mayor o menor nivel de pago de la Generalitat con las obras que se han realizado o se están realizando dentro del Plan

Confianza de obras municipales para generar empleo, que puso en marcha el Consell en el año 2009, en el epicentro de la crisis. «El problema de los constructores no es hoy el Plan Confianza, sino otros. Por ejemplo, la deuda con las em-

presas públicas de la Generalitat Valenciana, que el conseller Verdaguer quiere integrar en un consorcio. Ahí sí tenemos dudas a más largo plazo», sentenció Peláez Robles. Precisamente hace dos días, el Diario Oficial de la Generalitat

Valenciana publicó un decreto que tratar de frenar la sangría de las empresas públicas y obliga al equilibrio presupuestario y a dar prioridad a los proveedores, además de prohibir por ley las indemnizaciones millonarias a directivos de firmas públicas. A partir de ahora, los gestores de las empresas públicas, caso de Ciegsa para construir colegios, deben igualar su salario al de los altos cargos del Consell. Y antes de seis meses.

Posiblemente, las dudas de Peláez y su junta directiva residen en

que la creación de una Corporación Pública Empresarial Valenciana, decisión que se concretará con la Ley de Acompañamiento del Presupuesto del 2012, habilitará como objetivo la racionalización y ordenación del grupo que cuenta con más empresas, un centenar. Aun así, el Consell quiere fijar una moratoria de un año para crear más empresas públicas, pero no a más largo plazo.

La Conselleria de Economía obliga a partir de ahora a adecuar los gastos y las inversiones con los ingresos reales.